



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**43598/2023 URIBELARREA, FRANCISCO c/ EN-AFIP-RESOL 48/23
s/PROCESO DE CONOCIMIENTO Juzg. n° 1**

Buenos Aires, 23 de abril de 2026. ID

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. El actor promovió una demanda contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA—), con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución n° 48/2023, que rechazó el recurso de apelación interpuesto en los términos del artículo 74 del decreto n° 1397/1979 y confirmó el acto administrativo que lo intimó a que ingrese la suma de \$ \$2.213.769,56, más los intereses, correspondiente al impuesto a las ganancias —impuesto cedular “valores o depósitos”— correspondiente al ejercicio fiscal 2019 exteriorizado en su declaración jurada original.

Explicó que cometió un error al imputar las rentas del periodo 2019 cuando la presentación correspondía al periodo fiscal 2021. Manifestó que se trató de un error de fácil verificación, solicitó que se acepte la declaración jurada rectificativa n° 1, y acompañó documentación a esos efectos.

II. El juez resolvió: 1) admitir la demanda, 2) declarar la nulidad de la resolución n° 48/2023 y del acto administrativo emitido por la Agencia n° 51 que rechazó la declaración jurada rectificativa n° 1, y 3) imponer las costas a la parte demandada vencida.

Para así decidir expuso los siguientes fundamentos:

(i) El “art. 13 de la Ley 11.683 (t.o. 1998, conf. Ley 27.430) dispone: “La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se



base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración misma”.

(ii) El texto anterior a la modificación introducida por la ley 27.430 restringía “la situación excepcional allí regulada a los 'errores de cálculo”.

(iii) No se encuentra controvertido “que el 14/06/2021 ‘emitió una Carta Oferta para efectuar la venta de acciones de la empresa Bonsur S.A.’. Tampoco el hecho de que el 15 de julio de 2022, a las 13:14 horas ‘presentó una nueva Declaración Jurada (la cual no es objeto de la presente controversia) en la cual se consignaron exactamente los mismos datos que en la Declaración Jurada Inicial en cuanto a las sumas que se debía ingresar por el Impuesto Cédular, a saber: Ganancia Neta Sujeta a Impuesto: \$14.758.463,74; impuesto determinado (alícuota del 15%) \$2.213.769,56’. Así como tampoco se encuentra discutido que el ‘único cambio consignado [fue] en el período fiscal, informando correctamente ‘período fiscal 2021’, ni que el 20/07/2022 efectivamente ‘se abonó el VEP identificado con el Nro. 979430857 mediante el cual (...) ingresó la suma de \$2.213.769,56 correspondiente a la Declaración Jurada correctamente generada’. Por lo demás, tampoco ha controvertido el hecho de que, entre la declaración jurada inicial y las rectificativas, han pasado solo unos pocos minutos (v., asimismo, documentación obrante a fs. 2/22)”.

(iv) Se “observa que el error objeto de autos constituye un error material regulado por el art. 13 de la Ley 11.683 (t.o. 1998, conf. Ley 27.430), ya que resulta “de fácil observancia y constatación, sin necesidad de recurrir a la consulta de documentación complementaria y/o de activar mecanismos de fiscalización, a fin de determinar la viabilidad de la modificación pretendida” (Excma. Cámara del Fuero, Sala III, Causa CAF 36239/2012/CA1, ‘Venini, Carlos A.’, sentencia del 10/10/2024)”.

(v) “[E]xigir al contribuyente que recurra a la vía de la repetición para salvar una equivocación como la descripta constituye un ritualismo inútil que no está contemplado en la norma bajo consideración. Ello es así, no obstante, la responsabilidad del actor en cuanto a la exactitud de los datos contenidos en la declaración jurada rectificativa” (Excma. Cámara del Fuero, Sala IV, Causa 34814/2017, ‘Toledo, Gustavo’, sentencia del 17/06/2021).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**43598/2023 URIBELARREA, FRANCISCO c/ EN-AFIP-RESOL 48/23
s/PROCESO DE CONOCIMIENTO Juzg. n° 1**

(vi) “Máxime si se observa que, con posteridad al dictado de la Ley 27.430, dicha norma no restringe la situación excepcional allí regulada a los ‘errores de cálculo’, sino que extiende expresamente sus previsiones a los llamados ‘errores materiales’”.

III. La parte demandada apeló ese pronunciamiento y expresó agravios que fueron contestados.

Formuló los siguientes planteos:

(i) “Yerra el magistrado de grado al sostener livianamente que el error es de fácil observancia y constatación (...) de la simple lectura de las declaraciones juradas presentadas (determinativo período fiscal 2019, rectificativa en menos período fiscal 2019; y determinativa período fiscal 2021) no se advierten la existencia de errores aritméticos, producidos por la incorrecta realización de operaciones de suma y resta en el formulario”.

En atención error consignado en su declaración “la parte actora debió de abonar el mismo e iniciar la acción de repetición en los términos del artículo 81 de la Ley de Procedimiento Fiscal N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus mod.)”.

(ii) Ninguna “mención realiza sobre la jurisprudencia citada por esta parte”.

(iii) Niega “todos y cada uno de los hechos a la hora de contestar la demanda, esta parte no consintió ningún extremo expuesto por la parte actora, siendo falaz lo descripto en (...) la sentencia de primera instancia”.

(iv) Desconoce “los motivos por los cuales el magistrado de grado declara la nulidad de la Resolución N° 48/2023 (DI RPAL) y el acto administrativo emitido por la Agencia N° 51 que la misma confirma (...) no se observa en el decisorio una real fundamentación que dé lugar a la nulidad resuelta por el magistrado”.

IV. Los agravios de la parte demandada deben ser desestimados.



Insiste en esta instancia en que no se advierte en las declaraciones juradas presentadas por el actor un error de fácil constatación, toda vez que no se observan “errores aritméticos” o “errores de cálculo”. Sin embargo, omite rebatir que el juez tuvo en cuenta la existencia de un “error material” y que conforme a las normas vigentes y a las constancias de la causa aquél resulta subsanable.

V. No es correcto afirmar que el juez omitió examinar la jurisprudencia invocada. Por el contrario, examinó la redacción del artículo 13 de la ley 11.683 anterior a la reforma introducida por la ley 27.430 en la que solamente se admitía la rectificación de las declaraciones juradas en los supuestos de “errores de cálculo”, motivo por el cual los precedentes invocados no son aplicables por resolver un supuesto distinto al que fue examinado en la causa.

VI. Las críticas dirigidas a reprochar la valoración de las cuestiones fácticas no son atendibles, toda vez que no se aporta elementos adicionales que permitan conmovir el criterio sostenido en el pronunciamiento apelado, que encuentra su fundamento en las circunstancias acreditadas en la causa que no fueron controvertidas por la parte demandada.

Ciertamente, su queja se circunscribe a discrepar con la valoración efectuada por el juez, pero no efectúa una crítica concreta y razonada de las partes del pronunciamiento que considera equivocadas.

VII. En consecuencia, puede aseverarse que el juez realizó un exhaustivo tratamiento de las cuestiones de hecho, de las normas vigentes y de la jurisprudencia y de la doctrina en que se fundó su decisión de declarar la nulidad de los actos administrativos cuestionados, de manera que los agravios deben ser desestimados.

Como señaló el juez, la parte demandada se limitó a fundar su posición en la inexistencia de un “error aritmético” en las declaraciones juradas presentadas por el actor con el único objetivo de “justificar la postergación del





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I

**43598/2023 URIBELARREA, FRANCISCO c/ EN-AFIP-RESOL 48/23
s/PROCESO DE CONOCIMIENTO Juzg. n° 1**

debate sustancial hacia una eventual acción de repetición” (esta sala, causa n° 16741/2013 “*Actis, Laura Rosana s/ Dirección General Impositiva*”, [pronunciamiento del 25 de septiembre de 2015](#)).

VIII. En suma, corresponde desestimar los planteos formulados por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado.

IX. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la parte demandada vencida (artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En mérito de las razones expuestas, el tribunal **RESUELVE:** Desestimar los agravios de la parte demandada, con costas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).

